



Los “otros” aragoneses.

Ignacio Palazón Español, Diputado por el Partido Popular y Vicepresidente de las Cortes de Aragón.

Soy un aragonés y milito, con orgullo, en el Partido Popular. También soy uno de los miles de aragoneses que creemos en el Plan Hidrológico Nacional y que lo defendemos, contra viento y marea, incluso con discriminaciones sociales, sencillamente, porque entendemos que es bueno para nuestra tierra. Es una premisa que quiero establecer al inicio de este artículo. Soy de los “otros”. De los que no seguimos la línea oficial en Aragón. Y quiero decir que, como aragonés, siento igualmente los agravios que, desde principios del siglo XX, ha padecido nuestra tierra en materia de política hidráulica. Un agravio que se plasma en ver como nuestros cauces aportan al Ebro más de



6.000 Hm³ al año y, sin embargo, “nuestro” río se los lleva al Mediterráneo sin aprovecharse en la tierra que los ha generado. Y esa falta de aprovechamiento se traduce en una gran superficie de Aragón obligada a una agricultura de secano, con muy pocas perspectivas de futuro. También complica la instalación de industrias y dificulta el mantenimiento y ordenación de la población en un medio rural tan poco favorable. La densidad demográfica de 25 habitantes por Km² en Aragón frente a los 76 de la media nacional lo dice todo.

Ese es, en resumen, nuestro problema de siglos. Por ello algo tan serio fue abordado en 1992 en las Cortes de Aragón, buscando una solución al mismo. Y se estableció una solución unánime por parte de todos los partidos entonces presentes en el Parlamento Aragonés en lo que se denominó el Pacto del Agua. Necesidades presentes y futuras, reserva estratégica, obras, abastecimientos, depuraciones y medio ambiente fueron contemplados en este Pacto, cuyo único problema lo constituían, y lo constituye todavía, su coste y su financiación. El PSOE, que gobernaba entonces España, no tuvo sin embargo voluntad política para impulsarlo y, entre 1992 y 1996, las únicas obras que avanzaron fueron el pequeño embalse del Val y el de Montearagón, aunque este último se paralizase enseguida por problemas técnicos.

En 1996, con la llegada del PP al Gobierno de España, el Pacto del Agua comenzó a moverse. Lentamente al principio, porque los requisitos técnicos y administrativos de este tipo de obras son exigentes, pero la dinámica se aceleró: se aprobó el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro incluyendo el Pacto del Agua, se iniciaron los trámites de los embalses de Yesa, Biscarrués, Santa Liestra, Torre del Compte, Lechago y otros menos importantes, se reanudó Montearagón, se iniciaron los planes concretos de abastecimiento de agua a Zaragoza, Huesca, Teruel y otros municipios de Aragón y se inició un ambicioso plan de depuración de aguas de núcleos urbanos. Pero es en el pasado 2000, en septiembre, cuando el Ministro Matas da el paso definitivo presentando el Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y se inicia una controversia política de un calado insólito, especialmente radical en algunas comunidades autónomas como Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía.

Mi desconcierto la constituye la virulencia de la reacción contraria que este PHN ha producido en Aragón, aunque existe una máxima que quizás pueda explicar esto: *“Suele ser más eficaz una falsedad sencilla y fácil de entender que una verdad compleja y difícil de explicar”*. Y la verdad es que el mensaje de los opuestos al PHN que se está tramitando en las Cortes Generales es muy sencillo: *“¡Qué nos quitan el agua!”*. Y ante este mensaje surgen de nuevo los agravios a los que hacía referencia anteriormente, emergen las frustraciones de siglos y muchos ciudadanos salen a la calle sin pensar en la injusticia que supone que el blanco de sus iras sea el único Gobierno de España que desde 1915 ha movido ficha por Aragón y está desarrollando el Pacto del Agua, la solución propuesta por los propios aragoneses.

El PHN tiene dos partes muy diferenciadas. La primera, establece las obras de regulación, abastecimiento, depuración y actuaciones medioambientales de cada una de las Cuencas Hidrográficas de España, en las que incluyen expresamente todas las contempladas en el Pacto del Agua de Aragón y algunas más, negociadas por el PP de Aragón ante la inactividad del gobierno autonómico. La segunda, tras analizar diferentes opciones, considera como necesario para satisfacer las carencias estructurales hídricas de las cuencas deficitarias españolas un trasvase de 1.050 Hm³ desde el Ebro, a tomar, no lo olvidemos, desde el azud de Cherta, en Tarragona. Por ello resulta inexacta esa relación PHN = Traspase que se intenta establecer, como demuestran las mismas cifras del Plan. De casi 4 billones de pesetas se destinan 3,2 billones a resolver carencias internas de cuencas y sólo 700.000 millones para transferencias a cuencas deficitarias.

Por lo indicado al principio de este artículo, me voy a permitir hablar en nombre de los aragoneses que desean el PHN, entre otros muchos los regantes, y que defendemos el PHN convencidos. Y en su representación, transmitido por muchos de ellos, quiero decir que en lo producido desde el pasado septiembre de 2000 no entiendo, ni entendemos, demasiadas cosas. Que existen demasiados *“No entiendo”* y demasiados *“¿Por qué?”* de determinadas posturas y que nadie me sabe explicar.

No entiendo que el Partido Socialista, que elaboró en 1993, hace solo 7 años, un PHN de 13 trasvases con un total de 3.000 Hm³ defendido entonces a muerte por el actual Presidente de Aragón, haya pretendido defender un nuevo PHN elaborado aprisa y corriendo por la misma persona que coordinó el anterior, la Sra. Narbona, pero con postulados totalmente contrarios y deliberadamente *light*, para que pudiese ser defendido en cualquier territorio. En política hay que mojarse muchas veces y eso es lo que ha hecho el Partido Popular con el PHN. Por ello es tan significativa la soledad de la propuesta del PSOE, apoyada en el Congreso sólo por los votos de su grupo ... y no de todos.

No entiendo como el Gobierno de Aragón ha dejado pasar una oportunidad de negociación como la que se le planteaba con el PHN. La base de la política es la capacidad de negociación. Y en este aspecto resulta obligado comparar como han actuado los presidentes Pujol por Cataluña e Iglesias por Aragón. Porque no se puede negociar como ha hecho el Sr. Iglesias exigiendo de partida la retirada del PHN. No se puede utilizar, e incluso canalizar, los sentimientos de un pueblo en beneficio propio. El Partido Socialista ha visto en el PHN una ocasión de desgastar políticamente al Gobierno y, en el caso concreto de Aragón, de canalizar hacia el “enemigo exterior” la ineficacia y esterilidad de una coalición que gobierna en Aragón desde 1999, basada

en el victimismo y la queja permanente.

No entiendo que se diga que el PHN no contempla la denominada Nueva Cultura del Agua. Si se reducen los caudales a trasvasar y el número de trasvases en el nuevo PHN es porque en todas las cuencas, pero sobre todo en las deficitarias, se aplica y prevé aplicar con mayor intensidad una nueva gestión de la demanda de recursos hídricos, basada en el ahorro y la recuperación de esos recursos y la investigación para obtener de ellos toda su eficacia.

No entiendo que se cuestionen los estudios y las cifras del PHN cuando son las mismas y elaboradas por los mismos técnicos que en los tiempos del Ministro Borrell o se han utilizado las procedentes de comunidades autónomas con colores políticos muy diferentes. Soy un técnico que cree en los técnicos.

No entiendo que se diga y que se crea que la Directiva de la Unión Europea sobre el Agua es contraria al PHN. Numerosos expertos juristas han expuesto y motivado su opinión contraria a esta tesis. Y ha tenido que ser la propia Comisión la que pronunciase el pasado abril, a pregunta de un eurodiputado verde, que *“el PHN español no incumple ninguna norma comunitaria relativa a la gestión de cauces fluviales, ni al respeto del medio ambiente y del hábitat natural”* y que *“la Directiva Marco sobre el Agua no prohíbe los trasvases”*. Y cuando afirma que velará para que durante su ejecución se respeten las Directivas pertinentes está expresando, simplemente, que va a cumplir con su obligación, porque vigilar el cumplimiento de sus normas es una de las misiones de la Comisión.

No entiendo como se intenta hacer de la desalación una cuestión básica, y se dice que no se contempla, cuando el actual PHN incluye nada menos que 41 estaciones desaladoras: 20 en Canarias, 8 en Baleares, 4 en Andalucía, 7 en Murcia, 1 en Cataluña y 1 en Melilla. Esto sin olvidar los factores económicos y medioambientales que implican y complican el debate sobre el uso de la desalación.

No entiendo como se ha pretendido retrasar en lo posible la aprobación y, con ello, la ejecución del PHN. ¿No se le ha ocurrido a nadie el por qué de la urgencia del Plan? El Ministro Matas lo dijo en una reciente conferencia en el Club Siglo XXI: *“Este PHN será probablemente el último gran plan nacional”*. ¿No se les ocurre pensar por qué se establece en el mismo el horizonte 2008? ¿Cuándo finalizan los Fondos de Cohesión de la UE que suponen billones de pesetas? Incluso las zonas Objetivo 1 tendrán problemas con las incorporaciones de nuevos estados con rentas per cápita más bajas que la española. Por ello hay prisa. España tiene prisa y, lógicamente, su gobierno tiene prisa.

No entiendo como se acusa al PHN de limitar el futuro del Delta del Ebro, cuando el deterioro de este, producido por la retención de sedimentos en Mequinenza, Ribarroja y Flix, así como por la irregularidad estacional de caudales del Ebro, viene de años. El asegurar un caudal mínimo, el hacer las aportaciones más estables y establecer un Plan Integral específico para el Delta, como contempla el Plan Hidrológico Nacional, no puede mas que aportar beneficios en el mantenimiento de este ecosistema tan específico y frágil al mismo tiempo.

Finalmente, **no entiendo** como el Gobierno Aragonés, en un estado democrático, haya sido capaz de premiar a los ciudadanos que le apoyan en sus reivindicaciones contra el PHN con una medalla, la de Aragón, que por su mismo nombre debería ser objeto de

un respeto especial. Adopta así la política maniquea, propia de gobiernos autoritarios, de determinar el bien y el mal y de establecer dos tipos de aragoneses, los buenos, los que piensan como él, y los malos, los que disentiemos. Por eso en el título de este artículo yo me incluyo entre los “otros”. Queda siempre el consuelo de esa frase de A. France, el genial Premio Nobel, acertada como siempre: *“Aunque un millón de personas se crean un disparate, sigue siendo un disparate”*.
